Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN
Medellín, veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	Acción de Tutela
ACCIONANTE	ANA LUCIA FLOREZ ZAPATA
ACCIONADO	EPS SAVIA SALUD
PROCEDENCIA	Reparto
RADICADO	N° **05001 40 03 014 2022 00349 00**
INSTANCIA	Primera
TEMAS Y SUBTEMAS	derechos a la vida, la salud y la dignidad humana concede tutela
DECISIÓN	hecho superado, no concede Tratamiento integral
AUTO No	**117**

Procede el Despacho a emitir fallo dentro de la ACCION DE TUTELA, que promovió, la señora **ANA LUCIA FLOREZ ZAPATA** contra de **EPS SAVIA SALUD**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana.

I. ANTECEDENTES

1.1 Supuestos facticos. - Manifestó que, presenta diagnóstico de TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS, NO ESPECIFICADO, OTROS TRANSTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE Y SOSPECHA DE GLAUCOMA por lo cual su médico tratante le ordenó CITA DE PRIMERA VEZ EN MEDICINA INTERNA, CONTROL DE OFTALMOLOGÍA y TOMOGRAFÍA, sin que a la fecha de la presentación de la acción constitucional fuera posible la asignación de las mismas.

1.2 Tramite. - Admitida la solicitud de tutela el 06 de abril hogaño, se vincula a SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, VISIÓN INTEGRADOS S.A.S, INSTITUTO DEL CORAZÓN, se ordenó la notificación a la accionada, vinculadas y no se decretó la medida provisional.

1.2.1 El INSTITUTO DEL CORAZÓN, manifestó que, Se establece contacto con la señora Vanesa Gómez hija de la paciente en el número de celular 3217807843., se le asigna cita de Medicina Interna para el 13-04-2022 a las 03:00 p.m. Con la Dra. Diana Patricia Marriaga Suarez, en la dirección sede Laureles (circular 73 # 39-37).

1.2.2 VISIÓN INTEGRADOS S.A.S, manifestó que, Se procedió a verificar el registro de historias clínicas de la paciente desde el 01 de julio de 2021, al igual que los soportes allegados con la acción constitucional encontrando que la usuaria ANA LUCIA FLÓREZ ZAPATA CC 32019863 asistió a CONSULTA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA el día 12 de febrero de 2022 con el Dr. MICHAEL LIONELL MARTÍNEZ, atención médica en la cual el especialista le ordeno:

➢TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR, programada para el día 18 de abril de 2022 a las 02:00 PM con la profesional ALEJANDRA OSORIO BALBIN en la IPS VISIÓN INTEGRADOS. Calle 33 # 66 B-23. Llegar 1 hora antes con acompañante.
➢CONSULTA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA, programada para el día 20 de abril de 2022 a las 01:15 PM con el Dr. MICHAEL LIONELL MARTÍNEZ en la IPS VISIÓN INTEGRADOS. Calle 33 # 66 B-23. Llegar media hora antes, no requiere acompañante.

En comunicación telefónica 3122396326 con la señora ANA LUCIA FLÓREZ ZAPATA se brinda la programación del servicio y se dan las indicaciones. Manifiesta tomar nota, comprender y aceptar la programación. Indica comprender todas las instrucciones.

1.2.4 La EPS SAVIA SALUD, manifestó que, FRENTE A LA PRETENSIÓN DE: ordenar a la EPS SAVIA SALUD autorizar el servicio TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR, Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA la EPS tiene para informar que, SAVIA SALUD EPS Y UT VISIÓN INTEGRADOS (UT VISIÓN INTEGRADOS MEDELLÍN), crearon una alianza para la prestación integral, ágil y oportuna de los usuarios, donde no se requiere de autorización previa para su atención, se envía correo a dicha institución solicitando apoyo con la programación.

❖TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR, PROGRAMADA PARA EL DIA 18 de abril de 2022 a las 2:00 de la tarde, EN IPS VISIÓN INTEGRADOS. Calle 33 # 66 B- 23

❖CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA, PROGRAMADA PARA EL DIA 20 de abril de 2022 a la 01:15 de la tarde, EN IPS VISIÓN INTEGRADOS. Calle 33 # 66 B- 23
❖CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, autorizado bajo NUA 17300563, direccionado al prestador INSTITUTO DEL CORAZÓN SA. Programada para el 13 de abril de 2022 a las 03:00 de la tarde.

Se establece comunicación telefónica con la usuaria al número de teléfono 3122396326 – 3217807843 y se confirman las programaciones.

1.2.5 La SECRETARÍA DE SALUD DE ANTIOQUÍA, manifestó que, De acuerdo con la base de datos única de afiliados ADRES, la señora ANA LUCIA FLÓREZ ZAPATA, identificada con Cedula de Ciudadanía No 32.019.863, aparece como CABEZA DE FAMILIA del Régimen SUBSIDIADO en Salud, y figura como afiliado (a) ACTIVO a ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" Desde el 20 de mayo de 2013 hasta la fecha. Anexo pantallazo.

Mientras en el ADRES aparezca que la tutelante esta ACTIVO en SAVIA SALUD E.P.S. ESTA EPS ES SU ASEGURADORA por ende, la EPS ACCIONADA SERÁ LA ENCARGADA DE SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE REQUIERA LA TUTELANTE SIN GENERARLE LIMITACIÓN ALGUNA y así lo establece la jurisprudencia y la normatividad colombiana.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia. - Esta agencia judicial es competente para conocer y fallar de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 de la Constitución Nacional, art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

2.2. Problema jurídico. - Corresponde determinar si las entidades de salud accionadas están vulnerando a ANA LUCIA FLOREZ ZAPATA los derechos fundamentales invocados al no realizar la programación de TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA y CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA.

2.3. Marco Normativo aplicable. - Constitución Política: Arts. 1, 2, 11, 48, 49, 86, 228, 230. Decreto 2591 de 1991: Arts. 1, 5, 10, 23, 27, 29, 42. Decreto 306 de 1992: Arts. 4 y 6. Decreto 1382 de 2000.

2.4. De la acción de tutela - La acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política de 1991, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991).

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. De manera que, al existir estos mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la afectación de sus derechos debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia ésta que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrita, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes.

2.5. Sobre el Derecho a la vida digna y la seguridad social y la salud. La Corte Constitucional ha reiterado, que la tutela no solo procede para proteger el derecho a la vida reducida a su simple existencia biológica, sino que esta debe entenderse dentro de una dimensión más amplia, que comprenda una vida digna, Lo anterior por cuanto se ha estimado que el derecho a la vida en sí mismo considerado, no es un concepto restrictivo que se limita a la idea reducida de peligro de muerte, sino que se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las condiciones de salud, en la medida en que ello sea posible, cuando estas condiciones se encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida de las personas o las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una existencia digna.

La Seguridad Social es reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional fundamental. De esta manera, los artículos 48 y 49 de --- Carta Política establecen la seguridad social, por un lado, como un derecho irrenunciable, y, por otro lado, como un servicio público, de tal manera que, por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución.

La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.

De este modo, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos "indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad". De forma que se "garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuales depende su mínimo vital y su dignidad como persona".

El artículo 49 de la Carta Política consagra la salud como un valor con doble connotación: por un lado, se constituye en un derecho constitucional y, por otro, en un servicio público de carácter esencial. De esta forma, establece la obligación a cargo del Estado de garantizar a todas las personas la atención que requieran, así como la potestad que tienen las personas de exigir el acceso a los programas de promoción, protección y recuperación.

A partir de dicha disposición, la Corte Constitucional ha reconocido, en reiterada jurisprudencia, que el derecho a la salud es fundamental y "comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible, de acuerdo at mandato contenido en diversos instrumentos internacionales, el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud".

De este modo, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos "indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad". De

forma que se "garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuales depende"

2.6.- LA IMPOSICIÓN DE BARRERAS ADMINISTRATIVAS Y LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD. En sentencia T-188 de 2013, la Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo, manifestó:

> *En la Constitución de 1991 el derecho a la salud está regulado en el capítulo que versa sobre los derechos económicos, sociales y culturales. A su vez, en el artículo 44 de este capítulo, el constituyente consagró la salud y la seguridad social como un derecho fundamental de los niños.*
>
> *La Corte Constitucional ha establecido que el derecho a la salud debe ser prestado en términos de eficiencia, oportunidad y calidad, es decir que las entidades prestadoras del servicio de salud vulneran este derecho cuando le imponen al usuario cumplir con excesivos trámites administrativos los cuales postergan la adecuada prestación del servicio sin justificación constitucionalmente razonable. En este sentido la sentencia T-246 de 2010 cita la regla jurisprudencial establecida en la sentencia T-760 de 2008, así:*
>
> *"(…) que la prestación del servicio de salud debe ser eficiente, oportuna y con calidad. Primordialmente, este componente del derecho se desconoce cuando la negación para la autorización de un servicio incluido o no en el POS es justificada por parte de la EPS, debido a la falta de realización de trámites administrativos que, desde una perspectiva constitucional, carecen de razonabilidad puesto que son excesivos, demorados y engorrosos. Si bien puede exigirse llevar a cabo algunas formalidades administrativas, estas no pueden llegar al punto de obstaculizar y amenazar el goce de la vida y la integridad personal de quien requiere el servicio".*
>
> *En este orden de ideas, es razonable que para la prestación de algún servicio médico el paciente tenga que cumplir con algunos trámites administrativos, pero lo que resulta inadmisible es que dichos trámites sean excesivamente demorados y que además le impongan una carga al usuario que no está en condiciones y que no le corresponde asumir, al respecto la Corte ha dicho:*
>
> *"La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho a acceder a los servicios de salud, libre de obstáculos burocráticos y administrativos. Así, por ejemplo, cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una administración diligente, una EPS demora un tratamiento médico al cual la persona tiene derecho, viola*

el derecho a la salud de ésta. Los trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que tienen derecho, irrespetan el derecho a la salud de las personas.

Expresamente, la regulación ha señalado que "(…) los trámites de verificación y autorización de servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la institución prestadora de servicios y de la entidad de aseguramiento correspondiente." En especial, se ha considerado que se irrespeta el derecho a la salud de los pacientes cuando se les niega el acceso a un servicio por no haber realizado un trámite interno que corresponde a la propia entidad, como por ejemplo, 'la solicitud de la autorización de un servicio de salud no incluido dentro del POS al Comité Técnico Científico'.

La jurisprudencia de esta Corte al analizar las diferentes vulneraciones al derecho a la salud, ha evidenciado que los usuarios se tienen que enfrentar a múltiples trabas administrativas y burocráticas para poder acceder a la prestación del servicio de salud.

Estas barreras atrasan la prestación del servicio, aumentan el sufrimiento de las personas y muchas veces tiene consecuencias graves en la salud de los usuarios, como las siguientes: a) Prolongación del sufrimiento, que consiste en la angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo para ser atendidas y recibir tratamiento; b) Complicaciones médicas del estado de Salud, esto se debe a que la persona ha tenido que esperar mucho tiempo para recibir la atención efectiva, lo cual se refleja en el estado de salud debido a que la condición médica empeora; c)Daño permanente, cuando ha pasado demasiado tiempo entre el momento en que la persona acude al servicio de salud y hasta el momento en que recibe la atención efectiva, empeorando el estado de salud y por lo tanto generándole una consecuencia permanente o de largo plazo; d) Discapacidad permanente, se da cuando el tiempo transcurrido es tal entre el momento que el paciente solicita la atención y hasta cuando la recibe, que la persona se vuelve discapacitada; e) Muerte, esta es la peor de las consecuencias, y se puede dar cuando la falta de atención pronta y efectiva se tarda tanto que reduce las posibilidades de sobrevivir o cuando el paciente necesita de manera urgente ser atendido y por alguna circunstancia el servicio es negado.

Sin duda alguna la imposición de barreras administrativas y burocráticas, que impiden la prestación, pronta, adecuada y efectiva del servicio de salud tiene consecuencias perjudiciales en la salud de las personas, y en la medida en que las condiciones del paciente empeoren, necesitará una mejor atención o la prestación de servicios de mayor

complejidad, lo que implicará una erogación económica mayor a la inicialmente requerida de haberse prestado el servicio de manera oportuna y con calidad."

2.7.- EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO. - La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección cesa, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte en la T-011 de 2016 ha indicado que "la acción de tutela, en principio, "pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo". En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y "previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales". En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."

2.8 PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD PREDICABLE DEL DERECHO A LA SALUD. CASOS EN LOS QUE PROCEDE LA ORDEN DE TRATAMIENTO INTEGRAL.

Al efecto la Corte Constitucional en su Sentencia T 178 de 2017. M. Ponente Antonio José Lizarazo Ocampo índico frente al tema que: "Con relación al principio de integralidad en materia de salud, esta Corporación ha estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, relativa al concepto mismo de salud y sus dimensiones y, la segunda, a la totalidad de las prestaciones pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las condiciones de salud y de la calidad de vida de las personas afectadas por diversas dolencias o enfermedades. Así las cosas, esta segunda perspectiva del principio de integralidad

constituye una obligación para el Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud pues les obliga a prestarlo de manera eficiente, lo cual incluye la autorización total de los tratamientos, medicamentos, intervenciones, terapias, procedimientos, exámenes, controles, seguimientos y demás que el paciente requiera y que sean considerados como necesarios por su médico tratante. Luego, es posible solicitar por medio de la acción de tutela el tratamiento integral, debido a que con ello se pretende garantizar la atención en conjunto de las prestaciones relacionadas con las afecciones de los pacientes, que han sido previamente determinadas por su médico tratante. Cuando la atención integral es solicitada mediante una acción de tutela el juez constitucional debe tener en cuenta que esta procede en la medida en que concurran los siguientes supuestos: (i) la descripción clara de una determinada patología o condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable. Con todo, se torna preciso aclarar que este Tribunal ha identificado una serie de casos en los que se hace necesario otorgar una atención integral al paciente, independientemente de que el conjunto de prestaciones pretendidas se encuentren dentro de la cobertura del PBS-, cuales son aquellos en los que están involucrados sujetos de especial protección constitucional, vale decir, los que guardan relación con, entre otros, menores de edad, adultos mayores, desplazados, personas con discapacidad física, o que padezcan de enfermedades catastróficas.

2.9 El caso en estudio y solución al problema jurídico planteado. - Analizada la documentación aportada por la accionante, se tiene que ANA LUCIA FLÓREZ ZAPATA es paciente con diversas patologías entre ellas TRASTORNO DEL METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS, NO ESPECIFICADO, OTROS TRANSTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE Y SOSPECHA DE GLAUCOMA por lo cual su médico tratante le ordenó CITA DE PRIMERA VEZ EN MEDICINA INTERNA, CONTROL DE OFTALMOLOGÍA y TOMOGRAFÍA.

Al respecto, la EPS SAVIA SALUD, manifestó que la programación de las citas y examen se realizó así: TOMOGRAFÍA ÓPTICA DE SEGMENTO POSTERIOR, PROGRAMADA PARA EL DIA 18 de abril de 2022 a las 2:00 de la tarde, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA, PROGRAMADA PARA EL DIA 20 de abril de 2022 a la 01:15 de la tarde y CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, autorizado bajo NUA 17300563, direccionado al prestador

INSTITUTO DEL CORAZÓN SA. Programada para el 13 de abril de 2022 a las 03:00 de la tarde.

Para verificar lo anterior, se establece comunicación con la accionante 3122396326 con la accionante (miércoles 20 de abril 10.51 am), quien manifiesta que la cita de medicina interna y el examen solicitado fueron debidamente realizados en las fechas indicadas por la EPS, y que debe presentar en la tarde de ese día a la 1.15 para la consulta de oftalmología, se intenta establecer comunicación en la misma fecha (4.30 pm) y el 21 de abril de 2022 varias llamadas; así como a los No 3217807843, 3137985111 sin ser posible establecer comunicación; finalmente se recibe llamada del abonado No 3057475861 la señora Yuly Gómez hija de la accionante, quien informa que efectivamente u madre asistió a la consulta de Oftalmología.

De allí que nos encontremos ante una carencia de objeto por hecho superado, ya que la EPS SAVIA, por intermedio de su red prestadora de servicios programó y realizó CITA DE PRIMERA VEZ EN MEDICINA INTERNA y TOMOGRAFÍA.

Dicho lo anterior, pasa el Despacho a ocuparse de la procedencia del tratamiento integral; para la Corte Constitucional:

> *"…tal principio implica que la atención y el tratamiento a que tienen derecho las personas que se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, son integrales, lo que quiere decir que debe contener todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías, exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo lo que el médico considere necesario para restablecer la salud del paciente o para aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones dignas…".*

Para el caso concreto, se evidencia que **ANA LUCIA FLOREZ ZAPATA**, se le ha venido brindado diversa atención médica, sin embargo, atendiendo a los criterios establecidos, "Cuando la atención integral es solicitada mediante una acción de tutela el juez constitucional debe tener en cuenta que esta procede en la medida en que concurran los siguientes supuestos: (i) la descripción clara de una determinada patología o condición de salud diagnosticada por el médico tratante", frente a lo cual la solicitante no describe la patología o las patologías especificas frente a las cuales requiere el tratamiento, y de la revisión de la historia clínica se observa que a la fecha tiene diversos diagnósticos y

otros aún sin ser diagnosticados, en igual sentido las citas y examen solicitado en esta acción constitucional obedecen a diversas patologías, lo cual no le permite al Despacho establecer claramente frente a cuales realiza su solicitud, por lo cual el tratamiento integral no será concedido, por cuanto no se advierte de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario que se haya negado la prestación de servicios médicos asistenciales por parte de la entidad prestadora de servicios de salud accionada.

En mérito de lo dicho, **EL JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato constitucional,

III. FALLA:

PRIMERO: DENEGAR la presente acción de tutela **POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** frente promovida por **ANA LUCIA FLOREZ ZAPATA** en contra **EPS SAVIA SALUD,** por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No se concede el Tratamiento Integral por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

TERCERA: Notifíquese a las partes de manera personal o, en subsidio, vía fax o por el medio más expedito, a más tardar, al día siguiente de la fecha en que se profiere esta decisión.

CUARTO: Esta decisión puede ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación, remítase, al día siguiente, a La Corte Constitucional para su eventual revisión. Remisión que se adelantará una vez se levanta la suspensión eventual por la referida Corte.

NOTIFÍQUESE.

JHON FREDY CARDONA ACEVEDO
Juez

P1

Firmado Por:

Jhon Fredy Cardona Acevedo
Juez
Juzgado Municipal
Civil 014
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fac06655fc3c68de7c9058fb80db0cb027a0606ada19a110c0b8c61b97a6d2e4**
Documento generado en 21/04/2022 02:17:38 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica